

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO  
Magistrada Ponente

Auto - Ejecutivo	
EJECUTANTES	ALDEMAR DE JESÚS RAMÍREZ LÓPEZ
EJECUTADO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL – UGPP.
RADICADO	05001-31-05-015-2017-00533-01
TEMA	Auto de resolución de excepciones
DECISIÓN	Revoca y Confirma.

Medellín, veinte (20) de abril de dos mil veintiuno (2021)

*Estudiado, discutido, y aprobado en Sala virtual.*

Esta Sala asume la competencia en esta instancia, conforme a la regulación establecida por el Gobierno Nacional en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 “por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”; en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de Junio de 2020 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

En consecuencia, conforme al trámite establecido en las citadas disposiciones, que habilitan el procedimiento escrito, y cumplido el traslado a las partes en los términos reglados, procede la Sala Tercera de Decisión Laboral del

Tribunal Superior de Medellín a desatar el auto interlocutorio apelado, dentro del presente proceso ejecutivo laboral conexo, promovido por el señor **ALDEMAR DE JESÚS RAMÍREZ LÓPEZ** contra la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL– UGPP**.

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 020**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

## **I.- A N T E C E D E N T E S**

Para lo que a esta decisión interesa, es preciso reseñar que el señor **ALDEMAR DE JESÚS RAMÍREZ LÓPEZ**, actuando a través de apoderado judicial, formuló demanda ejecutiva laboral, para que se libre **MANDAMIENTO DE PAGO** a su favor, por los siguientes conceptos:

*“PRIMERA: Por la suma de \$41.854.800, por concepto de retroactivo pensional causado entre el 1° de diciembre de 2008 y el 31 de mayo de 2014.*

*SEGUNDA: Por las mesadas pensionales causadas a partir del 1° de junio de 2014 en cuantía de \$616.000,00 mensuales, sin perjuicio de los incrementos legales, y hasta el día del pago total de inclusión en nómina del demandante.*

*TERCERA: Mas la indexación de las sumas anteriormente enunciadas de conformidad con la sentencia objeto de recaudo.*

*CUARTA: Por la suma de \$14.168.000,00, por concepto de costas procesales de primera y de segunda instancia.*

*QUINTA: Por los intereses legales establecidos en el Artículo 1617 del Código Civil que generen estos capitales, liquidados desde su exigibilidad y hasta que se verifique el pago total de la obligación.*

*SEXTA: Condenar a la entidad demandada, al pago de las costas procesales, las cuales deben ser liquidadas de acuerdo con lo dispuesto en el acuerdo 1887 de junio de 2003, emanado del Consejo Superior de la Judicatura”.*

Como hechos relevantes, narró que al ejecutante mediante sentencia judicial de segunda instancia de fecha 30 de mayo de 2014, le fue reconocida una pensión de invalidez de origen profesional en cuantía mínima a partir del 1° de diciembre de 2008, ordenándose a su favor un retroactivo pensional calculado hasta el 31 de mayo de 2014, en la suma de \$41.854.800, junto con la indexación de las condenas y las costas procesales.

Señala también el escrito introductorio, que mediante auto del 13 de marzo de 2015 se aprobaron las costas procesales, incluyendo el valor de las agencias en derecho causadas en ambas instancias, y que la cuenta de cobro ante la entidad ejecutada se presentó el día 22 de mayo de 2017, sin obtener pago alguno hasta la fecha.

Luego mediante memorial de fecha 3 de agosto de 2017 (fls. 124) la parte ejecutante, desiste de las pretensiones primera y segunda, advirtiendo que estos dineros ya fueron cancelados.

Mediante proveído del 23 de agosto de 2017 (fls. 126 y 127), la juez de primer grado accedió a librar mandamiento de pago por los siguientes conceptos:

*“PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO en contra de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., representada por el doctor CARLOS AMADOR ÁLVAREZ GÓMEZ o por quien haga sus veces, y a favor del señor ALDEMAR DE JESÚS RAMÍREZ FLÓREZ, identificado con la cédula de ciudadanía 8.255.878, por:*

- *La indexación de la condena principal, que comprende el retroactivo y las mesadas causadas a futuro desde el 1° de junio de 2014 con base en el salario mínimo legal mensual sin perjuicio de los incrementos anuales de ley, como se dispuso en el fallo de segunda instancia, reconocimiento que se hace hasta el 30 de septiembre de 2014, toda vez, que el demandante fue ingresado en la nómina de octubre para sr pagada en noviembre del mismo año.*
- *CATORCE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL (\$14.168.000), correspondientes a las costas de primera y segunda instancia liquidadas en el proceso ordinario laboral que*

*dio origen a este ejecutivo conexo (Primera instancia \$1.848.000 y segunda instancia \$12.320.000).*

*SEGUNDO: NO LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por los intereses legales solicitados por lo argumentado en la motiva.*

*TERCERO: ACEPTAR EL DESISTIMIENTO que la parte ejecutante hace en el escrito del pasado 3 de agosto, con relación a las pretensiones contenidas en los numerales primero y segundo, del memorial de solicitud de mandamiento de pago que ahora se resuelve.*

*(...)”*

Y luego mediante auto del 8 de marzo de 2018 (fls.176) se declaró como sucesora procesal de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL – UGPP, ordenando la notificación correspondiente.

La apoderada judicial de la UGPP, dentro del término de traslado otorgado, se opuso a la totalidad de pretensiones formuladas (fls. 190 y 191) y propuso las excepciones de mérito que denominó: “*pago; compensación; y prescripción*”.

Y luego mediante memorial del 13 de junio de 2018, esta misma apoderada judicial, adjunta copia de la resolución N° RDP 003169 del 30 de enero de 2018, donde supuestamente se da cumplimiento a la sentencia de segunda instancia.

## **II. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE ALZADA:**

En la audiencia de resolución de excepciones realizada el día 18 de agosto de 2019, el JUZGADO QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, DECLARÓ no probadas las excepciones de PRESCRIPCIÓN, PAGO, y COMPENSACIÓN formuladas por la parte ejecutada UGPP, y dio por satisfecha la indexación del retroactivo pensional, en consecuencia, ordenó continuar

únicamente con la ejecución de \$14.168.000 que corresponde al valor de las costas procesales en ambas instancias.

Como fundamento de su decisión, estimó la juez de primer grado que la entidad ejecutada no probó que la obligación de costas procesales hubiese sido cancelada al ejecutante, y tampoco obra consignación judicial por dicho concepto, y por ello debe continuarse con la ejecución de esta condena.

Pero que no ocurría lo mismo con la indexación de las condenas, por cuanto el retroactivo pensional sobre la cual recaía este mecanismo de actualización monetaria, le fue cancelado al demandante en el año 2014, es decir, en el mismo año en que se profirió la sentencia de segunda instancia, y que al ser ello así, no se evidenciaba una depreciación del retroactivo adeudado, que deba ser objeto de la indexación reclamada.

En relación con la excepción de prescripción propuesta por la parte ejecutada, coligió la juez de primer grado que en materia laboral y seguridad social resulta inaplicable lo dispuesto en el art. 94 del CGP, pues existe norma propia en la especialidad para regula este fenómeno jurídico, arts. 488 del CST y 151 del CPTSS, y en el presente evento, la parte ejecutante no dejó transcurrir más de 3 años para reclamar el pago de las costas procesales, desde la ejecutoria del auto que las aprobó.

### III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

La referida decisión fue recurrida en apelación, por los apoderados judiciales de ambas partes, quienes sustentaron su inconformidad en los siguientes términos:

**Apelación de la parte ejecutante:** su apoderado judicial señala que no está de acuerdo con la decisión de no continuar con la ejecución de la indexación de las condenas por la cual se había librado mandamiento de pago, toda vez que la sentencia de segunda instancia proferida por esta misma corporación, ordenó el

pago de la referida indexación, obligación que hasta el momento no ha quedado satisfecha.

**Apelación de la Parte Ejecutada:** su apoderada judicial señala que la acción judicial para solicitar el cobro ejecutivo de las costas procesales se encuentra prescrita, pues la sentencia de segunda instancia que dispuso el pago de este concepto, quedó ejecutoriada en el mes de mayo de 2014, y la demanda ejecutiva laboral, apenas se presentó el 24 de mayo de 2017, es decir, cuando ya había transcurrido el término de 3 años al que aluden los arts. 488 del CST y 151 del CPTSS.

**Alegatos de conclusión:**

La apoderada judicial de la parte ejecutada, solicita en su escrito de alegaciones, se decrete la sucesión procesal o la terminación del proceso, en consideración a que el ejecutante ALDEMAR DE JESÚS RAMÍREZ LÓPEZ falleció el pasado 14 de enero de 2021 (aporta registro civil de defunción) circunstancia, que en criterio de la parte ejecutada, impide la continuidad del trámite procesal, dado que el apoderado de la parte ejecutante ya no cuenta con poder para representar a dicha parte.

También manifiesta que la UGPP emitió la resolución RDP 028751 del 24 de Septiembre de 2019, donde se reconoce y ordena el pago de las costas procesales sobre las cuales se libró el mandamiento de pago (\$14.168.000), sin embargo, dicho pago quedo suspendido hasta tanto se declare la sucesión procesal para así tener claridad sobre la persona que cuenta con derecho para reclamar, circunstancia de fuerza mayor, que exonera a la entidad del pago de las costas procesales en el trámite del proceso ejecutivo laboral conexo.

#### **IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA:**

Desatará la Sala los recursos de alzada interpuestos, tomando en consideración los puntos de inconformismo que sustentan dichos recursos, al tratarse de una providencia judicial que al tenor de lo dispuesto por el artículo 65 del CPT y SS., es recurrible en apelación.

En primer lugar, se resolverá la apelación presentada por la parte ejecutante, cuya problemática consiste en determinar si en el presente asunto se debe continuar o no con la ejecución de la obligación de hacer impuesta en la sentencia de segunda instancia de fecha 30 de mayo de 2014, consistente en la indexación del retroactivo pensional adeudado, o si dicha obligación se encuentra satisfecha como lo coligió la *A Quo*, en atención al pago realizado al actor en el mes de noviembre de 2014, por parte de POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., quien fue sustituida procesalmente por la UGPP en virtud del art. 1° del Decreto 1437 de 2015, por el cual se reglamentó el artículo 80 de la Ley 1753 de 2015.

Y en segundo lugar, se estudiará si la acción ejecutiva laboral se encuentra o no prescrita, en atención a la excepción propuesta en este sentido por la parte ejecutada, y los argumentos planteados en la apelación.

No obstante, y antes de proceder con la resolución de los problemas jurídicos planteados, esta Sala se pronunciará frente al solicitud de sucesión procesal y/o terminación del proceso por muerte del ejecutante, que hiciere la apoderada judicial de la UGPP en su escrito de alegaciones.

Al respecto debe decirse, que si bien el fallecimiento de una de las partes, conlleva a que el proceso continúe con su cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador, tal y como lo señala el art. 68 del Código General del Proceso, esto no significa necesariamente, que el apoderado judicial designado en vida por el propio demandante y/o ejecutante, haya perdido su capacidad de representación en el proceso, como lo sugiere la

parte ejecutada, por el contrario, el trámite judicial deberá continuar su curso mediante el mismo abogado contratado por el ejecutante en vida, a no ser que sus herederos decidan contratar un nuevo apoderado judicial, circunstancia que no se avizora en el sub lite.

Y es que a folios 120 del plenario, obra el poder otorgado por el señor ALDEMAR DE JESÚS RAMÍREZ LÓPEZ al abogado ALBERTO FERNÁNDEZ OCHOA, con nota de presentación personal ante el Notario Dieciséis del Círculo de Medellín, facultándolo expresamente en los siguientes términos: *“Mi apoderado queda facultado para recibir y cobrar el título judicial en la entidad bancaria sin ningún tipo de restricción legal, desistir, sustituir, reasumir y en fin de todas las facultades que tengan que ver con la disposición del derecho en conflicto”*.

Y según lo dispuesto en el inciso 5° del art. 76 del Código General del Proceso: *“...la muerte del mandante o la extinción de las personas jurídicas no ponen fin al mandato judicial si ya se ha presentado la demanda...”*, en consecuencia, al ser este el único poder obrante en el plenario para la tramitación del proceso ejecutivo laboral conexo, debe concluirse que el abogado ALBERTO FERNÁNDEZ OCHOA aún continúa con la representación judicial de la parte ejecutante, independientemente de la sucesión procesal que haya operado.

### **Resolución del recurso de apelación**

Sea lo primero, -a efectos de resolver lo pertinente-, recordar que, en el proceso ejecutivo conexo, el grado de semejanza que debe existir entre la parte resolutive de la sentencia ordinaria y la orden judicial de ejecución, es absoluta.

Tal exactitud funge como garantía de que la ejecución solo se adelantará por las obligaciones claras, expresas y exigibles que fueron impuestas en la sentencia resultante del proceso ordinario. Así, de un lado el título ejecutivo funge como garantía crediticia para el acreedor, ya que el mismo incorpora los derechos precisos que pueden hacerse exigibles por la vía ejecutiva, sin que pueda



interpretarse con alcance restringido lo esencialmente contenido en el mismo; y al mismo tiempo, este comporta garantía para el deudor, quien conforme a la incorporación precisa y exacta del derecho, no podrá ser perseguido en sus bienes y eventualmente ejecutado en un juicio, por ninguna obligación o importe que no contenga el propio documento.

Ello por cuanto, la fuerza de ejecutividad patrimonial del título ejecutivo (sentencia ordinaria) en contra del deudor (vencido en juicio en el proceso ordinario), no alcanza a comprender una nueva disputa de orden social.

Ir más allá de las obligaciones contenidas en la sentencia ordinaria, indudablemente significaría desbordar el alcance del crédito que contiene la providencia, y evidentemente ese ir mas allá situaría al sujeto de derechos en el escenario del proceso ordinario, y no del juicio ejecutivo.

Conforme a la jurisprudencia nacional, el *“que la obligación sea expresa, quiere decir que se encuentre debidamente determinada, especificada y patente. Que sea clara: Esto es, que sus elementos aparezcan inequívocamente señalados; tanto su objeto (crédito) como sus sujetos (acreedor y deudor). Que sea exigible: Significa que únicamente es ejecutable la obligación pura y simple, o que habiendo estado sujeta a plazo o a condición suspensiva, se haya vencido aquel o cumplido esta”* (Sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, del 22 de junio de 2001, Consejero Ponente Ricardo Hoyos Duque, Radicado 44001-23-31-000-1996-0686-01(13436).

## **CASO CONCRETO**

A efectos de establecer el monto de lo adeudado en este caso, resultante de las obligaciones impuestas por la Judicatura a la entonces POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. hoy UGPP, la Sala consultó las pretensiones reconocidas al señor ALDEMAR DE JESÚS RAMÍREZ LÓPEZ en el título ejecutivo constituido por la sentencia de segunda instancia de fecha 30 de mayo

de 2014 (fls. 89 al 104) y los autos que aprobaron las liquidaciones de costas procesales en ambas instancias de fecha 16 de julio de 2014 (fls. 106) y 23 de octubre de 2014 (fls.110).

Para tal efecto, la Sala transcribe a continuación el NUMERAL PRIMERO de la parte resolutive de la sentencia de segunda instancia, que contienen las condenas por concepto de retroactivo pensional e indexación de las condenas, así:

*“PRIMERO: REVOCAR la sentencia de origen y fecha conocidos, para en su lugar, CONDENAR a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A a reactivar a favor del señor ALDEMAR DE JESÚS RAMÍREZ LÓPEZ con C.C. 8.255.878 la pensión de invalidez de origen profesional conforme lo previsto en la Resolución 7716 de 1982, en proporción al salario mínimo legal a partir del 1° de diciembre de 2008, y pagar la suma de CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$41.854.800,00) por concepto de mesadas retroactivas causadas hasta el 31 de mayo de 2014; a continuar reconociendo a partir del 1° de junio de 2014 una mesada de \$616.000,00, sin perjuicio de los incrementos anuales de ley; y la indexación de las condenas.”*

Observa la Sala que la condena por indexación fue delimitada únicamente en su extremo inicial, esto es, la fecha de causación de cada mesada pensional, pues al desconocerse la fecha de pago del retroactivo adeudado, era imposible una liquidación en concreto de esta condena, lo que dio lugar a la orden en abstracto que como obligación de hacer le correspondía en su momento a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

En cumplimiento a lo ordenado en esta providencia, se efectuó un pago a favor del demandante por la suma de \$44.934.800, que comprende las mesadas causadas entre el 1° de diciembre de 2008 y el 30 de septiembre de 2014, suma que sería ingresada en la nómina del mes de octubre de 2014, y pagada en el mes de noviembre de la misma anualidad, según lo indicó POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. en comunicado de fecha 18 de noviembre de 2014 (fls. 111).

En vista que la sentencia de segunda instancia que ordenó la reactivación de la pensión de invalidez de origen profesional a favor del ejecutante, se profirió el día 30 de mayo de 2014, y que el pago del retroactivo pensional allí reconocido, también se efectuó en ese mismo año 2014, llevó a la *A Quo* a concluir que el retroactivo pensional adeudado al señor RAMÍREZ LÓPEZ no había sufrido depreciación alguna, y que por ende, no podía continuarse con la ejecución de esta obligación de hacer.

Sin embargo, estima la Sala que fue desafortunado el razonamiento expuesto por la juez de primer grado en la decisión interlocutoria objeto de apelación, pues con esta se desconoció el fenómeno jurídico de la causación de la mesada pensional, que no corresponde necesariamente a la fecha en que se efectúa su reconocimiento judicial, pues en realidad al ser la pensión de invalidez una prestación económica de naturaleza periódica o de tracto sucesivo, cada mesada tiene su propia fecha de causación, y por ello no era factible considerar que las mesadas de un retroactivo pensional declarado judicialmente en el año 2014, también se encontraban causadas en ese mismo año 2014, contrariando inclusive el contenido de la sentencia declarativa de segunda instancia, en la que se precisó frente al tema de la indexación de las mesadas pensionales lo siguiente (fls. 102):

*“...Por ello, a la mencionada entidad demandada se condena a indexar lo debido, desde la fecha en que se originó cada mesada pensional hasta el momento del pago de la obligación, teniendo en cuenta los índices de precios al consumidor certificados por el DANE y la siguiente fórmula de indexación...”*

Así las cosas, le asiste razón al apoderado judicial de la parte ejecutante, y por ello se revocará lo resuelto en este sentido, ordenando a la juez de primer grado a continuar con la ejecución de esta obligación de hacer, impuesta en la sentencia de segunda instancia de fecha 30 de mayo de 2014, no obstante, esta ejecución continuará en favor de la masa sucesoral del señor ALDEMAR DE JESÚS RAMÍREZ LÓPEZ, pues según el registro civil de fallecimiento aportado

por la apoderada judicial de la UGPP, este insuceso aconteció el día 14 de enero de 2021, es decir, durante el trámite del recurso de apelación en segunda instancia.

### **Prescripción de la acción**

Finalmente pasa la Sala a desatar el recurso de apelación formulado por la apoderada judicial de la parte ejecutada UGPP, quien insiste en la prescripción de la acción ejecutiva laboral tendiente al cobro coactivo de las costas procesales, por haberse instaurado la demanda ejecutiva cuando habían transcurrido más de tres (3) años desde que dicha obligación se hizo exigible; afirmando inclusive, que la exigibilidad de las costas procesales inició el día 30 de mayo de 2014, cuando se profirió la sentencia de segunda instancia por parte de la Sala Tercera Dual de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Medellín.

Para resolver, considera la Sala que no le asiste razón a esta recurrente, pues en primer lugar, debe decirse que entre la fecha en que se profirió la sentencia de segunda instancia (30 de mayo de 2014) y la fecha de presentación de la demanda ejecutiva laboral conexa (24 de mayo de 2017) no transcurrió el término trienal de prescripción, al que aluden los arts. 488 del CST y 151 del CPTSS; y en segundo lugar porque la exigibilidad de esta obligación, se configuró cuando quedaron ejecutoriados los autos de aprobación de las costas procesales de primera y segunda instancia que datan del 16 de julio de 2014 (fls.105) y el 23 de octubre de 2014 (fls.110); pues si bien es cierto, en la sentencia de segunda instancia se impusieron las costas procesales de las instancias a cargo de la parte ejecutada y se liquidaron las agencias en derecho de segunda instancia, faltaba la liquidación general de las costas procesales, pues están no solo comprenden las agencias en derecho, sino también otros gastos que se generen al interior del juicio. En consecuencia, se confirmará lo resuelto frente a la improperidad de la excepción de prescripción propuesta por la apoderada judicial de la UGPP, debiéndose continuar con la ejecución de este concepto a favor de la masa sucesoral del señor ALDEMAR DE JESÚS RAMÍREZ LÓPEZ, pues si bien la entidad ejecutada anuncia la expedición de la resolución RDP

028751 del 24 de septiembre de 2019, donde se reconoce y ordena el pago de los de \$14.168.000, también reconoce que dicho pago se encuentra suspendido, es decir, que el mismo aún no ha sido puesto a disposición del ejecutante o sus herederos, lo que impide acoger la excepción de pago formulada en este sentido.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la decisión proferida, y la improsperidad del recurso de apelación formulado por la apoderada judicial de la UGPP, las costas procesales en esta instancia, estarán a cargo de dicha parte y a favor de la parte ejecutante y/o su masa sucesoral, de conformidad con lo dispuesto en el art. 365 del Código General del Proceso, dentro de las cuales se fijan como agencias en derecho la suma de \$454.263.

## **V. D E C I S I Ó N**

El Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral,

### **R E S U E L V E:**

**PRIMERO: REVOCAR** el auto objeto de apelación de origen y fecha conocidos, en cuanto decidió no continuar con la ejecución de la obligación de hacer, consistente en la indexación del retroactivo pensional adeudado al señor ALDEMAR DE JESÚS RAMÍREZ LÓPEZ, para en su lugar, ordenar la continuidad de la ejecución por este concepto, según lo expuesto en precedencia.


**SEGUNDO: CONFIRMAR** en todo los demás el auto objeto de apelación de origen y fecha conocidos.


**TERCERO:** ante el fallecimiento del ejecutante ALDEMAR DE JESÚS RAMÍREZ LÓPEZ, se ordena que la ejecución continúe a favor de su masa sucesoral, según lo expuesto en precedencia.


**CUARTO:** Costas procesales en esta instancia, a cargo de la parte ejecutada y a favor de la parte ejecutante y/o su masa sucesoral, dentro de las cuales se fijan como agencias en derecho la suma de \$454.263.

**QUINTO:** Se ordena notificar lo resuelto en estados virtuales y la devolución del expediente al Juzgado de origen.

**Los Magistrados:**

  
**MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**  
Magistrada

  
**ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**  
Magistrado

  
**LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**  
Magistrada

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR  
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por  
estados N° **066** del **21 de abril de 2021.**

**Consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>